

# ¿CUÁNTO NOS CUESTA LA GUERRA?



Juliana  
Castellanos  
Díaz



# ¿Cuánto nos cuesta la guerra?

Costos del conflicto armado  
colombiano en la última década

¿Cuánto nos cuesta la guerra?: Costos del conflicto armado colombiano en la última década /director editorial Eduardo Norman Acevedo. -- Bogotá D.C.: Editorial Politécnico Grancolombiano, 2013.

148 p.: il. ; 24 cm.

Incluye referencias bibliográficas.

ISBN: 978-958-8721-23-1

1. GUERRA -- ASPECTOS ECONÓMICOS -- COLOMBIA -- SIGLO XXI. 2. EJÉRCITOS -- COSTOS -- COLOMBIA -- SIGLO XXI. 3. CONFLICTO ARMADO - COLOMBIA -- SIGLO XXI. -- 4. SEGURIDAD DEMOCRÁTICA -- COLOMBIA -- SIGLO XXI. I. Tít. II. Norman Acevedo, Eduardo, dir.

355.6861 cd. 21 ed. *Sistema Nacional de Bibliotecas - SISNAB*  
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano.

© Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

¿Cuánto nos cuesta la guerra?

Costos del conflicto armado colombiano en la última década

Juliana Castellanos Díaz

ISBN: 978-958-8721-23-1

E ISBN: 978-958-8721-24-8

Editorial Politécnico Grancolombiano

Calle 57 No. 3-00 Este Bloque A Primer piso

PBX: 7455555 ext. 1170

[www.poligran.edu.co/editorial](http://www.poligran.edu.co/editorial)

Agosto de 2013

Bogotá, Colombia

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes

Fernando Dávila Ladrón de Guevara

Rector

Sergio Hernández Muñoz

Decano Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes

Eduardo Norman Acevedo

Director editorial

David Ricciulli

Coordinador editorial

Hernán Dario Cadena  
Corrección de estilo

Taller de Edición • Rocca® S.A.  
Armada electrónica

Paola Moncada  
Infografías

Harry Olarte, William Burbano (TROMPO)  
Portada Ilustración y conceptualización

María Paula Campo, Carlos Barriga (TROMPO)  
Portadillas Ilustración y conceptualización

ePub x Hipertexto Ltda. / [www.hipertexto.com.co](http://www.hipertexto.com.co)

### **¿Cómo citar este título?**

Castellanos, J. (2013). *¿Cuánto nos cuesta la guerra? Costos del conflicto armado colombiano en la última década*. Bogotá: Editorial Politécnico Grancolombiano

La Editorial del Politécnico Grancolombiano pertenece a la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, ASEUC

*El contenido de esta publicación se puede citar o reproducir con propósitos académicos siempre y cuando se dé cuenta de la fuente o procedencia.  
Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor.*

# Introducción

**V**isibilizar los costos económicos del conflicto armado colombiano no es una labor que permite dimensionar la crueldad del fenómeno y la urgencia de finiquitar la paradoja que divide al país en uno que invierte cantidades asombrosas en la guerra y otro que, en consecuencia, cuenta con recursos mínimos para asegurar calidad de vida a sus ciudadanos a través del desarrollo equitativo. El tema, constante en las discusiones intelectuales, ocupa importantes espacios mediáticos desde octubre de 2012, fecha en la que el presidente Juan Manuel Santos anunció el inicio de los diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La noticia produjo una oleada de discursos sobre la necesidad de alcanzar la paz para emprender una ruta certera hacia el progreso.

Analistas internacionales profirieron, casi como una sentencia, que el fin del conflicto llevaría a Colombia por una senda de crecimiento económico importante en la que estarían puestas las miradas no solo de países de la región, sino también de países europeos urgidos de apoyarse en economías emergentes para sobrevivir a la crisis que los embarga desde 2008. De esta manera, el expresidente español Felipe González, manifestó en abril de 2013 durante una visita al país que: "Colombia tiene un crecimiento que se está acercando por primera vez en la historia a su crecimiento potencial. Si se consiguiera la paz hoy, creo que eso añadiría dos puntos al crecimiento de Colombia" (El Tiempo, 2013). Esta tesis la sigue Mauricio Cárdenas, ministro de hacienda de Colombia, al manifestar que "un proceso de paz permitirá al país crecer dos puntos adicionales del PIB" (Revista Dinero, 2013). Porque, según la revista Dinero, una investigación realizada por el ministro en el 2007 demostró cómo el crecimiento económico en Colombia se había reducido 2% entre 1980 y 2005, comparado con el obtenido entre 1950 y 1980.

Rajiv Shah, director general de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus iniciales en inglés), en una visita que realizó a la Casa de Nariño para manifestar el apoyo del Gobierno norteamericano al proceso de paz, declaró a los periodistas que: "creemos que la sociedad debe ser amplia y debe ser integral para cubrir temas como el desarrollo agrícola (...)

Principalmente hablamos de la oportunidad de traer la inversión privada para el trabajo de las áreas rurales en Colombia" (La W Radio, abril de 2013). Es claro el interés económico que por cuenta del proyecto de Santos se empieza a despertar en las zonas históricamente temidas por los empresarios extranjeros.

Las posturas de los personajes citados revelan, entre líneas, que pese a la estabilidad económica que el país ostenta en los últimos años, el conflicto armado inhibe un avance de mayor envergadura y que, de no tenerse, Colombia sería un modelo a seguir. La cuestión, compleja por tratarse de uno de los conflictos más viejos del mundo, también hace parte de los análisis que la academia y los representantes de la sociedad civil hacen desde finales del siglo anterior en debates públicos y en documentos que forman hoy una sólida bibliografía a través de la que reclaman un país en el que no se frustre más el desarrollo social, político y económico, sobre todo de las áreas rurales.

Eduardo Pizarro cita un estudio de Kasuke Imain y Jeremy Weinstein sobre el impacto de las guerras en la economía, del que concluye que:

*En los países en los cuales el conflicto armado interno se expandió geográficamente más allá de la mitad del territorio, la tasa de crecimiento económico se vio reducida en un 1.25% anual en promedio y la inversión privada doméstica cayó en un 4% anual en promedio. (...) La caída en inversión privada fue superior al descenso de la inversión pública debido, ante todo, a la mayor sensibilidad del sector privado frente a la*

*incertidumbre económica que genera la guerra y a su posibilidad de trasladar sus inversiones a regiones con menos riesgos. (Pizarro, 2004, p. 238).*

El trabajo es coherente con la situación que atraviesa Colombia. Los procesos de desarrollo que llegan por vía pública y privada se han visto limitados y en otros casos absolutamente frustrados por los obstáculos que la guerra impone, entorpeciendo el progreso que se impulsa desde los diferentes escenarios económicos que van desde la tienda de barrio y el campesino en su parcela, hasta la empresa nacional y multinacional.

El tema es profundo y enmarañado, tanto como la raíz de un árbol que se extiende subterráneamente ante la comprensión de pocos; y cuando es arrancado sorprende a aquellos que vieron crecer el follaje sin sospechar la dimensión de los raigones. De la misma manera, los costos económicos del conflicto armado crecen de cara a una minoría. Pero hoy, frente a la posibilidad del fin, los números saltan de las bocas de los analistas que, esperanzados o no, reconocen las implicaciones positivas que la paz traería al campo económico; igualmente, aceptan que un adecuado postconflicto significaría inversiones cuantiosas.

Es preciso colocar la lupa sobre el tópico en cuestión y empezar por preguntarse: ¿qué tipos de costos produce un conflicto armado interno?

Paul Collier (citado por Pizarro, 2004, p. 237), plantea que hay cinco ángulos desde los que se pueden analizar los



costos de una guerra del tipo colombiano: (1) *la destrucción*, relacionada en primer lugar con lo que se pierde y no tiene recuperación como las vidas; y en segundo lugar, hace alusión a la destrucción de la infraestructura cuya reparación implica costos importantes para el Estado. (2) *La disrupción*, alude a todos los gastos que se generan para el sector privado y público por cuenta de la inseguridad nacional y por el caos social que un conflicto conlleva. (3) *La desviación*, contempla los recursos que el Estado invierte en la confrontación del conflicto. (4) *La transferencia*, implica la fuga de capital que se da por cuenta de la inseguridad, lo que obliga a inversionistas a trasladar sus negocios a países con mayor orden. (5) *La pérdida acumulada*, suma los gastos generales que un conflicto acarrea, y se mide a través del aumento o caída del Producto Interno Bruto (PIB).

En el siguiente cuadro se exponen ejemplos de los conceptos tratados:

Categoría	Ejemplos
Destrucción	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Destrucción de vidas humanas (disminución de capital humano)</li> <li>- Atentados a la infraestructura</li> <li>- Atentados a oleoductos- torres de energía.</li> </ul>
Disrupción	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inseguridad en las vías</li> <li>- Aumento en gastos de seguridad y por lo tanto de los productos.</li> </ul>
Desviación	Inversión que el Estado hace en material de guerra.
Transferencia	Inversionistas privados transfieren sus recursos a otros países más seguros.
Pérdida acumulada de crecimiento	Stock de capital (humano, físico y financiero)

Cuadro propio, elaborado con datos de Pizarro, 2004, p. 237

Reunir en un solo estudio las pruebas fácticas de las cinco categorías expuestas es un trabajo titánico. Por consiguiente, este libro se concentra en la categoría que Collier nombra *desviación*. "La desviación consiste en la transferencia del gasto público hacia actividades con bajo impacto para el crecimiento económico, tales como la adquisición de armas, municiones y equipos militares" (Pizarro, 2004, p. 238).

En el caso nacional, los recursos que se amparan en el concepto de *desviación* superan lo bélico en tanto implican, entre otros, la lucha contra el secuestro, la atención a desplazados, las políticas de indemnización de víctimas directas, las políticas fijadas para los procesos de reinserción de organizaciones paraestatales y contraestatales, la atención a las quejas por infracciones a

los derechos humanos y a los convenios internacionales, entre otras cuestiones.

La asignación presupuestal referente a los factores listados se intensificó al finalizar la década de los noventa por el recrudecimiento del conflicto armado y el fallido proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana. Pero cobró una importante alza entre el año 2003 y el año 2007 con la Política de Seguridad Democrática del gobierno de Alvaro Uribe Vélez, cuya ejecución implicó la asignación de sumas históricas para el gasto en seguridad y defensa, en detrimento de la inversión social que la ciudadanía requería. Paradójicamente se produjo en algunos sectores económicos la recuperación de la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros; el caso del turismo fue ejemplar.

Expertos manifiestan que si bien un ambiente de seguridad es requisito para la prosperidad, no lo es todo si se trata de planificar un crecimiento económico sostenible que contribuya a un sólido desarrollo. Echeverry, Salazar y Navas (citados por Durán, 2011), explican que "la pérdida en términos de crecimiento económico por causa del conflicto no es muy alta, pero sostienen que los conflictos de larga duración como el que se experimenta en Colombia sí producen una desviación de la economía de su senda de crecimiento de largo plazo" (2011, p. 34). Carlos Caballero Argáez, ex ministro de minas y energía, afirma: "considerar que es posible recuperar la economía y lograr estabilidad

política y social, sin contar primero con un ambiente de seguridad y la vigencia del imperio de la ley en el país simplemente no es realista" (2003, p. 18). En suma, como lo expresa Pizarro, "una guerra interna no solo destruye el presente, sino, ante todo, hipoteca el futuro de una nación" (2004, p. 239).

Las difíciles circunstancias que la guerra interna produjo en los noventa hizo, como se ha explicado, que en las agendas gubernamentales el conflicto ocupara el lugar principal. Muestra es que en los últimos diez años Colombia gana los primeros lugares en inversión en defensa y seguridad frente a otros países de la región.

Por consiguiente este libro se propone, en primer lugar, revisar la inversión económica que en materia de defensa y seguridad ha hecho el Estado colombiano en la última década (2002-2012), para la lucha frontal que el conflicto produce. En segundo lugar, busca exponer otros costos representativos que la guerra genera de cara a la protección de la población involucrada, que implica tanto a víctimas como a victimarios que desean desvincularse del conflicto. Finalmente, se traza una reflexión sobre cómo la suma de los recursos que se invierten en el conflicto podrían destinarse a otros frentes que han recibido menos atención del gobierno.

Para alcanzar los objetivos señalados se plantea una metodología de recopilación de información mediante la indagación de fuentes primarias y secundarias, en un

dedicado trabajo de reportería, a través del cual se adquiere información verbal y escrita de las instituciones estatales responsables de cuestiones del conflicto, y se revisa documentación pública correspondiente a las asignaciones monetarias para afrontar la guerra.

El estudio se hace en un momento histórico, en el que revisar cuánto ha gastado el Estado en el conflicto armado y qué resultados ha obtenido permite reflexionar sobre la urgencia de encontrar la paz. La justificación se solidifica si se asume que definitivamente cualquier lucha armada trae consecuencias nocivas al crecimiento económico de una nación, influyendo notablemente en sistemas vitales para la calidad de vida de un pueblo como la salud, la educación, la vivienda, áreas que se ven limitadas presupuestalmente porque, ya se ha dicho, priman los montos para afrontar la guerra.

Tal situación es contradictoria debido a que la ineficiencia de los sistemas nombrados les permite a los grupos ilegales avanzar en sus propósitos a través de la conquista de adeptos. Prueba de ello son las explicaciones que algunos jóvenes desmovilizados de las Farc dan cuando se les pregunta por las razones que los llevaron a unirse a dicha organización. Entre las respuestas se encuentra: falta de oportunidades laborales, necesidades económicas familiares, carencia de oportunidades para estudiar, límites de progreso en el campo. Sobre esto afirma Caballero Argáez: